EL ABANDONO Y DESAMPARO DE LA TERCERA EDAD

**SANDRA MICHELL HUNTER
ANA ROSA ROYERO FUENTES**

CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO

SIMON BOLIVAR

INSTITUTO DE INVESTIGACION CONTINUA E INVESTIGACIONES

FACULTAD DE DERECHO

MODULO EN ACTUALIZACION EN JURISPRUDENCIA

BARRANQUILLA

2000

EL ABANDONO Y DESAMPARO DE LA TERCERA EDAD

**SANDRA MICHELL HUNTER
ANA ROSA ROYERO FUENTES**

Ensayo de grado presentado como requisito para optar al título de Abogado

CORPORACION EDUCATIVA MAYOR DEL DESARROLLO

SIMON BOLIVAR

INSTITUTO DE INVESTIGACION CONTINUA E INVESTIGACIONES

FACULTAD DE DERECHO

MODULO EN ACTUALIZACION EN JURISPRUDENCIA

BARRANQUILLA

2000

CONTENIDO

	Págs
INTRODUCCION	
EL ABANDONO Y DESAMPARO DE LA TERCERA EDAD	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5
ANALISIS SOCIO - POLITICO DEL PROBLEMA	8
PROPUESTA	10
CRITICA	14
CONCLUSIONES	19
APORTES	22
BIBLIOGRAFIA	

INTRODUCCION

Muy a menudo vemos como de manera insensible integrantes de la Tercera Edad son desatendidos, maltratados y lanzados a las calles por sus propios familiares, pues para ellos constituye una carga, la manutención y los cuidados en general que por obligación les corresponde prestar a un padre, a un abuelo.

Ante esta crítica situación de abandono, la desprotección, la falta de asistencia a la Tercera Edad se nos ocurrió plantear una serie de inquietudes:

- ¿No es suficiente el hecho de ser un ciudadano como cualquier otro para recibir un tratamiento digno cuando las circunstancias de la vida no nos favorecen?
- ¿Se necesita pertenecer a determinada clase social para poder exigir del Estado el derecho a un mínimo vital para la subsistencia?
- ¿Es acaso la Tercera Edad una enfermedad contagiosa de la cual nos debemos apartar?
- ¿Será que la política estatal no logrará satisfacer las necesidades básicas de la Tercera Edad en condiciones de abandono y desprotección?

Las respuestas a estas preguntas trataremos de evaluarlas, en el desarrollo de este trabajo, el cual surgió como una inquietud ante el manejo dado a las políticas existentes en materia del tratamiento dado a la Tercera Edad en Colombia, pero más concretamente en el Distrito de Barranquilla.

Este trabajo ha sido además producto de una investigación limitada más que todo por el tiempo pero que pretende hacer una crítica constructiva y al mismo tiempo contribuir para el mejoramiento de un grupo representativo de la comunidad barranquillera como es la Tercera Edad, quienes a (nuestra) consideración se encuentran en estado de abandono y desamparo.

La norma legal que le da vida a la protección y asistencia a la Tercera Edad es de rango constitucional, la norma en mención es el artículo 46 de la C.N., aunque ya en tiempo pasado se había hablado de este tema en la Ley 29 de 1975. Pero realmente tuvo su esplendor en la Constitución de 1991 en el artículo antes citado, en desarrollo de esta norma surge la Ley 60 de 1993, sin embargo con esta ley ha sucedido lo mismo que con muchas otras, se crea una norma y la ley que lo reglamenta o desarrollada pero no deja de ser letra plasmada en un papel a la cual se le da poca aplicabilidad.

Con base en esta falta de aplicabilidad, en esta falta de acción y cumplimiento es que se ha desarrollado este tema. En el partimos de la Norma Constitucional, hacemos un análisis sucinto de ella, críticas y posteriormente hacemos una serie

de propuestas que pretenden o buscan de manera humilde hacer un aporte que contribuya como solución a la problemática del abandono y desamparo de la Tercera Edad.

Es así como no se justifica que creadas las partidas a cargo del situado fiscal para la cobertura de programas orientadores en las áreas de la salud y la educación, se deje de lado o abandonado a un sector tan débil, tan vulnerable por su condición misma como es el grupo de la Tercera Edad.

Cuando pensamos en la idea o la intencionalidad que pudo tener el legislador al crear la norma en mención, es desconcertante que al momento de aplicarla, sea mal aplicada, desmembrada y hasta le es arrebatado su real finalidad; luego, entonces no es difícil concluir que en este caso concreto la norma si fue creada con base en una realidad latente dentro de un marco social en un momento dado de la historia, pero que desafortunadamente al instante de aplicarla o no la interpretan de acuerdo con la intención del legislador o sencillamente, ella es presa de la corrupción de funcionarios acostumbrados y llenos de vicios que aplican de manera caprichosa de acuerdo a los intereses políticos del momento que así le favorezcan.

EL ABANDONO Y DESAMPARO DE LA TERCERA EDAD

ANTECEDENTES

Se habla por primera vez de protección por parte del Estado a la Tercera Edad en la Ley 29 de 1975 que se reglamenta con el Decreto 2011 del 24 de Septiembre de 1996, pero la realidad es que no se dió la procedencia debida a la ley en mención; se le llegó a dar importancia una vez que con el pasar del tiempo se fue agudizando la problemática de la Tercera Edad, no sólo por la desprotección, el abandono y el estado precario en que iba quedando este grupo, sino porque día con día era mayor cada vez más el número de personas que pertenecían a este grupo.

Posteriormente surge esta inquietud en el legislador del año 1991 quien plasmó en el Artículo 46 de la Carta Política de este mismo año la norma que dignificaría un poco el modus vivendus de la Tercera Edad, fue así como quedó plasmado dentro del Capítulo II de la Constitución del 91, cuyo título es "De los Derechos Sociales Económicos y Culturales" y que dice: "El Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la Tercera Edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria.

El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia".¹

Posterior a esto surge la Ley 60 de 1993 en desarrollo de la Norma Constitucional.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Cada día que pasa cobra mayor importancia en el mundo entero la temática de la Tercera Edad, ya que es un hecho cierto que muchas sociedades actualmente alcanzan índices bien altos en cuanto a este grupo de la población. Pero aún más preocupante son los problemas que trae consigo como son la no preparación del medio o de la comunidad para esto, la falta de garantías por parte del Estado y el no contar con una infraestructura bien sólida para el tratamiento que se le debe dar a la Tercera Edad.

Esta problemática es algo que debe atenderse con urgencia en especial en un país en vía de desarrollo como el nuestro, donde la gran mayoría de la población está representada en la Tercera Edad.

Desafortunadamente lo plasmado en la Constitución no se ha cumplido a cabalidad. Si bien es cierto, que la protección y asistencia le atañe al Estado, es

bueno aclarar que esta función no es exclusiva, o potestativa del Estado, la sociedad o la familia, los tres deben concurrir para el cumplimiento de esta función social, sin que sea posible para alguno de ellos abstenerse de ese deber jurídico con el pretexto que otros deben hacerlo.

Cuando la carga que implica la protección y asistencia de la Tercera Edad sea para la familia de tal magnitud, dadas sus condiciones económicas, que atenten contra ella como institución básica de la sociedad, el Estado o la sociedad debe concurrir para garantizar el cumplimiento de esta obligación.

Lo que ha pretendido el constituyente cuando habló de protección y asistencia a la Tercera Edad, fue darle calidad de vida a este grupo representativo de la población y esto dentro del contexto de asilos u hogares geriátricos debe estar orientado por unas directrices en las cuales debe primar el bienestar de los ancianos y muchas veces la situación real de estos hogares va en contradicción con esas directrices, pues a más cupos en cada institución de éstas, menores son las posibilidades de ofrecerles calidad de vida a los mismos.

El Estado ofrece albergues a algunos ancianos o miembros de la Tercera Edad desprotegidos en las instituciones públicas conocidas como asilos o centros de bienestar, etc., pero la realidad es que la mayoría de estas instituciones son de carácter privado y la atención en éstas es por obvias razones mejor que en las

La vejez y el envejecimiento fue motivo de interés de la política del Salto Social del Doctor Ernesto Samper, donde se asume que la salud y el bienestar de la edad avanzada depende de la calidad de vida que se lleve desde el nacimiento, por lo tanto, es de aclarar que el compromiso del Estado, la familia y la sociedad inicia desde que el niño empieza a hacer parte integral de la misma como un coasociado más y de ahí en adelante durante toda la evolución de sus etapas de crecimiento y madurez hasta llegar a la Tercera Edad, vistas éstas cada una en cada caso concreto y acorde con la etapa por la que esté pasando el coasociado.

Por otra parte, en desarrollo de la norma de rango constitucional en su inciso final hace especial énfasis en que el Estado le garantizará a la Tercera Edad los servicios de seguridad social y el subsidio alimentario en caso de indigencia, es así como dentro de la política del Salto Social se crearon fundaciones como REVIVIR; este tipo de programas han manejado ciertos mecanismos de control como una especie de filtro, que busca prestar el servicio a personas que en verdad lo necesiten, para ingresar hay que cumplir con ciertos requisitos:

- Tener 65 años o 50 si es discapacitado.
- Haber vivido en el Distrito los últimos dos años.
- No ser pensionado.
- Vivir de la caridad pública.
- No defender económicamente de persona alguna, etc.

En Barranquilla la encargada del programa REVIVIR es la Doctora Lourdes Castro. Aquí los de la Tercera Edad reciben una pensión de \$90.000 pesos, más los regalos que les dan en diciembre, pueden ser abanicos, colchonetas, etc. Mensualmente reciben un mercadito.

Los ancianos indigentes según la definición efectuada por el Consejo Nacional de Política Social deberán residir en alguno de los entes territoriales que participan en el programa, dentro de las condiciones establecidas en la Norma, también podrán ingresar al programa los indígenas que tengan 50 años o más, esta misma edad se les aplicará a los indigentes, dementes y minusválidos.

ANÁLISIS SOCIO - JURIDICO DEL PROBLEMA

En la actualidad la situación de la población de la Tercera Edad del Distrito de Barranquilla es un reflejo de la situación de la Tercera Edad en Colombia, la atención y los servicios que hacen parte de políticas se vienen dando hace aproximadamente dos décadas, los últimos cuatro gobiernos se han preocupado por la suerte de la Tercera Edad en Colombia, especialmente los últimos dos gobiernos, han hecho especial énfasis en atender el envejecimiento poblacional.

Las políticas de atención con este sector de la población han evolucionado gracias a los avances de la ciencia social. Hoy vemos como un desarrollo de lo propuesto en el gobierno del Doctor Ernesto Samper Pizano, con su política del

Salto Social, se le trató de dar importancia protagónica al grupo poblacional de la Tercera Edad, sin embargo, muy a pesar de lo intentado mediante varios tipos de programas en pro de la asistencia y protección de la Tercera Edad, prácticamente se ha coartado el impulso y dichas políticas nacen a la vida jurídica de una manera tímida, lo cual deja bien claro que no sólo son insuficientes, sino que no basta con que la protección a la Tercera Edad sea una norma de orden constitucional, sino que hace falta que se le de real aplicabilidad y que se ajuste a la realidad vivida en cada caso en un momento determinado de la historia.

Cuando decimos que no se ha cumplido con lo planteado es porque solo hay un porcentaje minoritario vinculado a los programas creados a partir del artículo antes citado.

Encontramos que por ejemplo, tenemos una Ley de Seguridad Social (Ley 100 del 93) que cobija solo a una parte de la población de la Tercera Edad, presenta entonces problemas de tipo asistencial.

Con el programa REVIVIR en lo que respecta a la ciudad de Barranquilla, podemos decir que de los 3.265 cupos existentes, éstos no satisfacen las necesidades de la ciudad, más aún cuando enfrentamos la problemática a gran escala de los desplazados, agravando no sólo la situación de desempleo, sino todas las consecuencias negativas que trae consigo éstos últimos, los problemas enmarcados dentro del ámbito social.

PROPUESTAS

Colombia requiere empezar a desarrollar un sistema institucional de atención a la Tercera Edad que le permita enfrentar los cambios sociales y económicos que plantea tener una población de la Tercera Edad cada vez más numerosa. Ello es de especial importancia debido a que los cambios demográficos y la tendencia a la nuclearización de la familia (varias familias bajo un mismo techo. Ejemplo : Tía y sobrina, etc.) hace que la protección familiar a la Tercera Edad se esté reduciendo, lo cual exige un mayor esfuerzo por parte de la sociedad en su conjunto.

En el contexto general de las políticas para el tratamiento de la Tercera Edad, hay que tener en cuenta el principio de la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y las personas senescentes.

Como ya se dijo, los programas para la implantación de la política relativa a la Tercera Edad hacen parte de las políticas a la Tercera Edad hacen parte de las políticas del "Salto Social" y se insertan en los principios que rigen la ejecución de las competencias de la política social entro la nación las entidades territoriales, definidas en la constitución política y desarrolladas por el Decreto Ley 2132 de 1992 y la Ley 60 de 1993 que organiza el Sistema Nacional de Conformación.

Las políticas presenta una serie de alternativas que serán la solución a múltiples problemas que afrontan la Tercera Edad paso que todavía tiene gran vacío en su aplicación y manejo. Esta ley propone a manera de resumen:

Programas en cuanto a la seguridad social: un plan de atención básica (PAB) buscando en la prevención, un régimen subsidiado de la seguridad social en salud, las EPS afiliaran a la Tercera Edad a través del I.C.B.F., el programa REVIVIR para la Tercera Edad en estado de indigencia.

El Ministerio del Trabajo, incurrirá planes de preparación para la jubilación en el sector público y privado y del Fondo de Solidaridad Pensional para otorgar subsidio salariales independientes menores de 65 años, otros programas son:

- El de la integración económica consiste en la creación de bancos de expertos con la ayuda del SENA y la ONGS.
- Programa de recreación cultural y educación para promover mayor integración y participación.
- Programa de vivienda, con las políticas demanda social y urbana y subsidio familiares demanda.
- Programa de una cultura para el envejecimiento y la vejez, para promover un cambio de cultura respecto a la tercera edad.

En la ley 60 de 1993 también propuso dentro del área de la salud un programa para financiar, la dotación, construcción, ampliación y remodelación (de acuerdo a cada caso) y el mantenimiento integral de las instituciones de prestación de servicios que no estén a cargo del municipio, las inversiones en dotación básica, la construcción y mantenimiento integral de los hogares geriátrico para lo cual deberán concurrir los departamentos.

Los recursos para todos estos programas estarán a cargo del situado fiscal.

En cuanto a lo que conviene al Distrito de Barranquilla la ley estableció una función de vigilancia y control de las políticas implementadas tanto en el sector salud como en la educación, esta función fue descrita por la ley como "la labor de ejercer inspección y vigilancia de la educación y la salud y diseñar criterios para su desarrollo en los departamentos distritos y municipios; ejercer la supervisión y evaluación de los planes y programas y, en especial, de la utilización de las cesiones y participación de los grados de cobertura y calidad de servicio; pero además establece que se debe informar a la comunidad sobre estos resultados; promover ante las autoridades competentes, las investigaciones que se derivan de las actuaciones de los funcionarios.

Este punto es de vital importancia para este ensayo, pues los programas que ofrece para la protección y seguridad social y cambio a la problemática de la Tercera Edad es básico para subsanar en gran medida diversos programas pero

es sumamente desconcertante que por completa que sea esta legislación le hace falta elementos de trascendental importancia como son acción y cumplimiento sobre una base real, realidad vivida y sufrida.

Nuestro país por la gran mayoría de los miembros de la tercera edad y más concretamente en Barranquilla.

Finalmente, ante la situación de abandono y desprotección de la tercera edad, nuestra propuesta lleva inserto los siguientes puntos:

- Iniciar campañas masivas para la recuperación de valores a nivel de la familia como célula principal de la sociedad que es.
- Reestructurar algunas políticas con respecto al manejo de los hogares de ancianos o asilos.
- Aumentar en cantidad y crecer en calidad los asilos y los servicios que en ella se presta.
- Que se continúe trabajando con base en la política del salto social en lo que respecta a protección y asistencia a la tercera edad.
- Que se difunda más cuáles y cuánto son los síntomas de la demencia senil, y que de igual forma se le enseñe a la comunidad en general como se debe tratar un anciano en edad senil.
- Buscar despertar en cada uno de los coasociados el interés por aprovechar el torrente de conocimientos y experiencias de el "viejo " en esta ciudad.

CRITICAS

Por si fuera poco muy a pesar de no ser aplicadas estas políticas en los lugares, en los momentos donde en verdad se requiera, nos encontramos con un hecho todavía más preocupante y es que aún existiendo todos los programas antes mencionados la cobertura es insuficiente o es muy poca, hay otros programas que ni siquiera se han iniciado por aparento falta de recursos y los que se han iniciado no se han implementado a constancias, a cabalidad, ejemplo de esto son las conocidas E.P.S. que solo atiendan a un número determinado de ancianos y son precisamente los que ellos elijan para ello, o simplemente no lo atiendan, en conclusión las instituciones que existen para los ancianos son insuficientes.

Las transformaciones en la dinámica familiar traen muchos problemas para los ancianos, como ya lo anotamos, pues la tendencia de la familia moderna es ser cada vez más pequeña y relegar más al anciano, amparándose para ello en el hecho de las circunstancias económicas que la afectan.

El desarrollo de estas políticas actuales de vejez, no contemplan, una campaña masiva para la recuperación de los valores familiares y la inserción del "viejo" al seno de sus familias, lo que provendrá bastante el abandono.

Es necesario que se cumpla más a cabalidad las normas y en general la legislación, crear estrategia de atención, ofrecer mejores servicios y que ellos

están buscando en necesidades reales, esto se podría lograr haciendo estudios profundos por parte de profesionales idóneos y por supuesto donde se tome en cuenta al anciano y este se haga así participe; no podemos seguir sometiendo a los ancianos a una vida deprimida y sin garantía, a pesar de todos los mecanismos creados por la ley para protegerlos y ayudarlos. Desafortunadamente es muy común ver como se ha convertido casi en una constante que los hijos, los nietos, o cualesquiera otros miembros de una familia intimen a sus padres en instituciones que si bien es cierto fueron creadas para esa actividad más logran por mucho cuidado y dedicación que lo ofrezcan al anciano, brindarles el calor de hogar de la familia, de su propia familia, pero sobre todo donde le brindan el amor y protección que cuando sus propios hijos y nietos fueron niños ellos brindaron con desmedido esmero.

Algunas veces incluso echan a los ancianos a la calle, convirtiéndose esto muchas veces en mendigos, indigentes y algunos acaban tristemente pueden ser arrollados por un vehículo automotor o solo desvalidos en plena demencia senil o mal de Alzheimer.

Sin embargo cabe hacer en este punto más crítica y es que muy a pesar de haber cumplido con el llenado de los requisitos previos el ingreso a la institución, el solo hecho de estar dentro del programa como beneficiario durante un año no constituye duración para continuar siéndolo durante el año siguiente, ni exige al beneficiario de hacer solicitud para los años posteriores. Las instituciones

prestadoras de servicios y las entidades promotoras seleccionadas por los entes territoriales, deberán cumplir anualmente los procedimientos establecidos para tener derecho a participar de la nueva escogencias.

También pueden estar o ser sujetos del programa aquellas personas que no residan en una institución sin ánimo de lucro.

Por otra parte en medio de política como son un estado social de derecho todas las personas en especial dada sus condiciones las personas de la Tercera Edad deben tener derecho a una mínima condiciones para su subsistencia. Sin embargo aunque la Constitución no consagra de manera expresa un derecho a la subsistencia esta puede deducirse de los derechos a la vida, a la salud, al trabajo, y a la asistencia o a la seguridad social. La persona requiere de un mínimo de elementos materiales para subsistir.

El derecho a un mínimo vital, no otorga un derecho subjetivo a toda persona para exigir, de manera directa y sin atender a las circunstancias especiales del caso, una prestación económica del Estado.

Aunque de los deberes sociales del Estado se desprende la realización futura de esta garantía, mientras históricamente ello no sea posible, el Estado está obligado a promover la igualdad real y afectiva frente a la distribución inequitativa de recursos económicos y a la escasez de oportunidades.

Existe una íntima relación entre el derecho a un mínimo vital y el compromiso institucional para garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas de acuerdo con lo establecido en los artículos (324, 334, 350, 357, 366 de la Constitución Nacional. El carácter programático de las disposiciones económicas no es excusa válida para que el Estado desatienda sus deberes sociales cuando las necesidades básicas ya han sido cubiertas mediante el desarrollo de la infraestructura económica y social y, por lo tanto, se encuentra materialmente en capacidad de satisfacerlas, sea de manera particular o de manera general.

En estas circunstancias se concretiza o materializa la existencia de un derecho prestacional del sujeto para exigir del Estado el cumplimiento y la garantía efectiva de sus derechos sociales, económicos y culturales.

Es de mucha importancia establecer que si bien es cierto el derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitución como un derecho fundamental, estos derechos establecidos de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución Nacional y de manera específica respecto de las personas de la tercera edad, adquiere el carácter de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como el derecho a la vida (Constitución Nacional Artículo 11), Dignidad Humana (Constitución Nacional Artículo 1), la integridad física y moral (Constitución Nacional Artículo 12), o el

libre desarrollo de la personalidad (Constitución Nacional Artículo 16), de las personas de la tercera edad (Constitución Nacional Artículo 46).

Por otra parte el Derecho Internacional da fondo la importancia central de los derechos de la seguridad social. Diversos instrumentos otorgan estatus de derecho fundamental a la satisfacción de las necesidades básicas de la persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el más importante documento del Derecho Internacional Humanitario, estatuyó en su artículo 25: "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la morada, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tienen, así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, conformidad, invalidez, viudez y vejez y otras causas de partida de sus modos de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

El concepto de necesidades básicas en nuestra Constitución no solo es acogido y lo reafirma como la atención con exigencias primarias de los seres humanos, sino que convierte ese cometido en primordial del Estado y del ordenamiento. El concepto de "necesidades básicas insatisfechas" condiciona la apropiación y distribución de partidas presupuestales y del gasto público social.

CONCLUSIONES

De toda la anterior información podemos decir o establecer que:

La Tercera Edad en Colombia, y más particularmente en Barranquilla, se encuentra prácticamente en estado de abandono.

Los aportes que entrega o que asigna el Estado para programas encaminados a la protección y asistencia a la Tercera Edad en la mayoría de los casos deseados a destinos diferentes al establecido, esto constituye un agravante del hecho de que dichos partidos que deben estar a cargo del situado fiscal son insuficientes.

De tal manera que los entes estatales a quienes les encomendaron esta labor trabajan con pocos recursos para satisfacer las necesidades de muchos, es por esto que muchas veces los asilos deben solicitar ayuda a las empresas privadas para poder sostenerse se puede concluir que el manejo dado a este tipo de políticas para la protección y asistencia de la tercera edad no es asertivo tiene demasiadas falencias.

Es desconcertantes que muchos políticos solo se acuerdan de los "viejos" en épocas preelectorales, buscando con esto sumar simpatizantes a sus campañas

pero esto solo constituye una fachada, incluso hay quienes, se crean proyectos de la ley para supuestamente favorecer a este sector representativo de la población y finalmente luego de ser debatidos incluso aprobado una vez creada las partidas presupuestales para ello, más el porcentaje de dicha partida que es absorbido por burócratas y las asignaciones son hechas sin tomar en cuenta las necesidades reales de la edad.

DISTRISALUD en Noviembre del 96 se creó la No. 4288 la resolución que habla de la promoción de la salud y más concretamente para beneficiar a las tercera edad es así como en la contra asistencia se han aprobado grupos de hipertensos o con conformidades cardiovasculares, diabetes, etc.

Como anteriormente lo anota el resultado del descenso en la mortalidad y los niveles de fertilidad más bajo y más estable, la proporción de personas mayores de 60 años en regiones en vía de desarrollo aumentó del 7% a más del 12% de la población, se prevé que para el año 2025 el número de personas mayores de 60 años se duplicará de 330 millones a 835 millones, casi triplicándose.

Se cree que el impacto de envejecimiento global será una carga medida en término de la demanda. En atención sanitaria, ingreso y apoyo familiar.

En Colombia hay un poco más de dos millones de ancianos de cinco millones que existen de los cuales cuatrocientos mil son pensionados y otro tanto posee

rentas propias o son sostenidos por su familia lo cual quiero decir que aproximadamente 1.2 millones de ellos se encuentra en condiciones de indigencia o semi - indigencia de este último grupo un poco más de 14.000 se encuentran en los ancianatos inscritos lo cual nos dice, que casi dos millones de ancianos están desprotegidos.

La iniquidad de los ingresos, las situaciones de rechazo y abandono familiar, la inaccesibilidad a las sanciones de salud y la escasa cobertura de programas estatales de protección al anciano, están en directa relación con el bajo nivel de autoestima

a una vida digna, los cuales hemos vistos vulnerados por el mismo Estado, la sociedad y la familia

Suspender los sorteos que vienen llevando a cabo para recibir un mercado como si el alimento en la tercera edad no fuera necesario.

Que se cree el Código del Anciano, que no sea tan solo un anteproyecto como lo que propuso el Doctor Enrique Peñaloza.

BIBLIOGRAFIA

REPUBLICA DE COLOMBIA, Constitución Política de 1991.

REPUBLICA DE COLOMBIA, Sistema de Seguridad Social Integral. Ley 100 de 1993, Decreto Reglamentario. Santafé de Bogotá 1997.

REPUBLICA DE COLOMBIA, Ley 60 de 1995.

REPUBLICA DE COLOMBIA, Código Civil. Decreto Ley 29 de 1975.